



EDITORIAL

Incautaciones de droga en el aeropuerto

El narcotráfico busca diversas formas de permear el trabajo que desarrollan las policías y otras instituciones públicas vinculadas a la seguridad ciudadana, como el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Aduanas. Por ello, estos organismos también avanzan en fortalecer y modernizar sus mecanismos de control, especialmente en una región como Tarapacá, que es utilizada como una de las principales rutas para el ingreso de sustancias ilícitas hacia otras zonas del país.

En este contexto, la fiscalización que se realiza en el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique ha permitido detectar que el terminal aéreo es uno de los puntos críticos en esta labor. Prueba de ello es que, durante los tres primeros meses del año, las incautaciones de distintas drogas aumentaron en un 150% en comparación con lo decomisado en el mismo periodo de 2025.

Estas cifras indican con

claridad que los traficantes están utilizando todos los caminos posibles para trasladar su mercancía ilícita hacia la zona centro y sur del país.

De acuerdo con los an-



Durante los tres primeros meses del año, las incautaciones de distintas drogas aumentaron en un 150%”.

tecedentes aportados por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) en la región, entre enero y marzo se detectaron 25 kilos de cocaína base, 16 kilos de clorhidrato de cocaína y casi 5 kilos de ketamina, sustancia que era transportadas por pasajeros en el terminal aé-

reo. En estos procedimientos se logró detener a 17 personas: dos chilenas, 14 bolivianas y una ciudadana española.

El significativo aumento de las incautaciones no solo da cuenta de la importante labor que desempeñan los funcionarios en el aeropuerto y en otros puntos de Tarapacá, sino también de la necesidad de incrementar las herramientas técnicas y los recursos humanos que permitan hacer frente a estas bandas delictuales, las que por lo general cuentan con cuantiosos recursos para operar.

El tráfico de drogas es un negocio altamente lucrativo para las organizaciones de crimen organizado, que buscan apoderarse de territorios para operar. Esto finalmente se traduce en un alto costo para las comunidades donde este flagelo se instala, ya que no solo impacta en la salud pública, sino también en la seguridad de numerosos barrios.